

III. EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA

En las últimas décadas, la Educación Superior ha experimentado un proceso de expansión significativo. Entre el 2000 y 2018, la tasa bruta de matriculación en el mundo pasó del 19 % al 38 %, siendo Asia oriental y sudoriental y América Latina y el Caribe (ALC) las que registraron el mayor crecimiento (UNESCO-IESALC, 2020). A diferencia de otras regiones, en donde el aumento se evidenció desde los años 80, en América Latina este fenómeno se aceleró a partir de la década del 2000 (Marquina et. al, 2022), con un aumento en la tasa bruta de matriculación del 29 %, pasando del 23 % en el año 2000, al 52 % en 2018 (UNESCO-IESALC, 2020).

De acuerdo con la UNESCO-IESALC (2020), la expansión de la Educación Superior se ha manifestado, primero, en un incremento en el número de estudiantes que demandan este nivel educativo; segundo, en un mayor interés por conocimientos y experiencias internacionales, y tercero, en una mayor diversidad de programas académicos. Con respecto al primer punto, las inversiones previas en Educación Básica y Secundaria impulsadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe posibilitaron que un mayor número de estudiantes finalizaran el nivel secundario y exigieran estudios terciarios (Marquina et. al, 2022).

Ante esta alta demanda, y en un contexto de crecimiento de la clase media y de reformas privatizadoras que estaba experimentando la región a mediados de los años 80, el sector privado tomó fuerza y hoy juega un papel clave en la provisión y expansión de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Desde 1998, más de 10.000 Programas y 2.300 Instituciones han sido creados en la región y, actualmente, uno de cada dos estudiantes de Educación Superior está matriculado en una institución privada, superando el promedio de los países de la OECD (26 %) (Arias Ortiz, Bornacelly & Elacqua, 2021). Cabe mencionar que, a mediano y largo plazo, se proyecta una estabilización de la demanda, debido a la disminución relativa de la población entre 18 y 24 años en ALC, lo cual representa un reto en términos de la necesidad de asegurar una población cualificada en el futuro, especialmente, en estudios terciarios (Marquina et. al, 2022)

La participación del sector privado en la provisión de Educación Superior en ALC es heterogénea. Mientras en Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela y

Bolivia el 30 % o menos de la matrícula está en el sector privado, esta cifra asciende a más del 70 % en Chile y Brasil, seguidos por Perú, Costa Rica y Colombia con tasas cercanas al 60 % (Arias Ortiz, Bornacelly & Elacqua, 2021; Marquina et. al, 2022).

Ante la dificultad de la oferta pública de cubrir la demanda de Educación Superior, la oferta privada en los países de ALC tendió a desarrollarse bajo las lógicas del mercado, sin mayores controles y, en muchos casos, sin mecanismos de aseguramiento de la calidad. Esta situación dio como resultado una tendencia a reforzar el papel del Estado en los procesos de depuración y acreditación de Programas e Instituciones y promover la mejora institucional continua. En casi toda la región se establecieron agencias para el Aseguramiento de la Calidad y los marcos legales de países como Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay ya han introducido mecanismos sofisticados y estandarizados de gestión de la calidad educativa, uno de los aspectos de mayor transformación en las últimas dos décadas (UNESCO, NU. CEPAL & UNICEF, 2022).

Es de resaltar que la expansión de la Educación Superior en América Latina y el Caribe se ha desarrollado en un contexto de profundas desigualdades. Si bien en las últimas décadas la región ha obtenido importantes logros sociales y económicos, los países de ALC se mantienen entre los más desiguales del mundo: el 50 % más pobre de la población se lleva el 10 % de los ingresos, mientras el 10 % más rico recibe el 55 %. En cuanto a la riqueza, la concentración de esta es mucho mayor: el 10 % más rico acumula el 77 % de la riqueza y el 50 % más pobre solo el 1 % (De La Mata et. al, 2022). Situación que demanda una robusta intervención del Estado para poder “equilibrar la cancha” fundamentalmente para los sectores y territorios en condición de vulnerabilidad.

Buena parte de la explicación de los niveles de riqueza en la región se encuentra en la persistencia de los niveles de educación y resultados laborales concentrados en ciertos sectores regionales y de la población. De allí que la educación sea una de las dimensiones en donde más se manifiestan los inaceptables niveles de desigualdad: quienes nacen en familias con condiciones socioeconómicas desfavorables, enfrentan desventajas estructurales que reducen de manera importante las posibilidades de ascenso social intergeneracional (De La Mata et. al, 2022).

En la región, el incremento en el acceso a la Educación Superior se ha caracterizado por una mayor participación de jóvenes de escasos recursos, debido a políticas asistenciales y transitorias mediante la oferta de becas, apoyos económicos y subsidios necesarios para garantizar el acceso de esta población –sobre todo a la educación privada –, que han sido sostenidas en el tiempo. Pese a ello, en los últimos 20 años en ALC se ha presentado una expansión importante de programas sociales, como las transferencias condicionadas –como Prospera en México, Bolsa Familia en Brasil y Familias en Acción en Colombia – y el acceso a créditos públicos y privados para el acceso a Educación Superior – Icetex en Colombia y Elige Carrera en Chile (Arias Ortiz, Bornacelly & Elacqua, 2021).

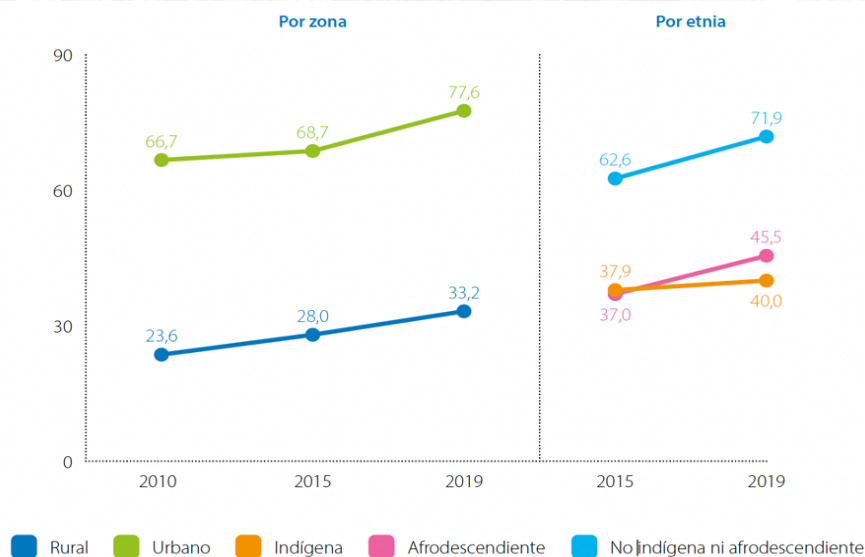
Estos mecanismos de financiación son fundamentales en países como Chile, Brasil y Colombia, en donde los hogares asumen, en una gran proporción, los costos de los estudios terciarios. En América Latina y el Caribe, más del 50 % de la matrícula de la Educación Superior la financian las familias (UNESCO, NU. CEPAL & UNICEF, 2022) y solo el 21 % de los estudiantes cuentan con apoyo financiero o con algún tipo de ayuda de los gobiernos (Arias Ortiz, Bornacelly & Elacqua, 2021).

Las desventajas en el acceso se agudizan según el grupo poblacional al que se pertenece. Aunque en los últimos 20 años se evidencia una participación creciente de las mujeres en la Educación Superior, con un 36,6 % respecto al 25,6 % de los hombres entre 2000 y 2020, aún persisten desigualdades en el acceso en función del género (UNESCO, NU. CEPAL & UNICEF, 2022). Así pues, las carreras asociadas a las Ciencias Sociales y al cuidado, como las de la Salud y la Educación, cuentan con una mayor participación de población femenina, contrario a los programas académicos vinculados a las Tecnologías, Ingenierías e Industria, en donde su presencia sigue siendo minoritaria.

Las poblaciones históricamente excluidas en la región como las rurales, afrodescendientes e indígenas también enfrentan grandes desventajas en materia de acceso. El gráfico 1 evidencia las marcadas diferencias en la tasa bruta de matriculación entre las poblaciones de zonas rurales y urbanas con 44 puntos porcentuales de diferencia respecto a 2019. En el caso de las poblaciones étnicas, las diferencias en la tasa bruta de matriculación a 2019 son del 26 % para la población afrodescendiente y del 32 % para la población indígena, con respecto a la población no étnica. Para las poblaciones indígenas, esta brecha aumentó en un 7 % entre 2015 y 2019 y en un 4 % para las rurales (UNESCO, NU. CEPAL & UNICEF, 2022). Todo lo anterior sugiere la necesidad de desarrollar

políticas de Estado estables y estructurales para garantizar el acceso de los sectores más vulnerables a la Educación Superior, así como poner fin a los sesgos culturales que “orientan” la elección de carreras según género.

Gráfico 1. Tasa bruta de matriculación en Educación Superior por zona y etnia en países de América Latina (%)



Fuente: UNESCO, NU. CEPAL & UNICEF, 2022, p.143.

A la expansión de la Educación Superior en medio de un contexto de grandes desigualdades se suma la crisis medioambiental y el estancamiento económico que venía experimentando la región en los años previos al 2020 y que fue agudizado por la pandemia del COVID-19. Durante este período se restringieron los recursos públicos, se contrajo la matrícula y se incrementaron las dificultades para el pago de los estudios por parte de las familias, lo que afectó tanto a las Instituciones de Educación Superior públicas como privadas.

Si bien la modalidad virtual, impulsada por la crisis de la pandemia, se convirtió en una tendencia que ha permitido la incorporación de estudiantes a los que la presencialidad no les brindaba la oportunidad de acceder a estudios de Educación Superior, se hizo más que evidente la debilidad de la gran mayoría de Instituciones de la región, en materia de infraestructura, conectividad y Docentes preparados en el manejo de herramientas tecnológicas y en el dominio de técnicas pedagógicas para la virtualidad.

De acuerdo con el Banco Mundial (2023), desde el inicio de la pandemia, los estudiantes han perdido alrededor de 1,5 años de aprendizaje, viéndose afectados, en mayor medida, los niños y niñas más vulnerables, quienes pueden perder hasta un 12 % del total de los ingresos que percibirán durante toda su vida. Desafío que deben enfrentar las Instituciones de Educación Superior para permitir un ingreso fluido y exitoso de estas poblaciones estudiantiles a la cultura académica.

Con relación a los jóvenes, la pandemia redujo sus ingresos; contribuyó a una fuerte caída del empleo juvenil que empeoró la transición de esta población al mercado laboral y la continuidad de la formación educativa. Es conocido que esta situación incidió en una disminución en la tasa de inscripción en Educación Superior; incrementó el número de jóvenes que no estudian ni trabajan (“Nini”); afectó la salud mental y deterioró las habilidades socioemocionales de muchos y muchas jóvenes (Schady et. al, 2023).

La masificación de la Educación Superior registrada en la región, ligada a los efectos que trajo consigo la pandemia, ha dejado en evidencia dos grandes desafíos: Por un lado, las inequidades entre estudiantes, las cuales se expresan en casos de deserción, bajo rendimiento académico y dificultades para el desarrollo de las trayectorias educativas, que hacen necesario y urgente la implementación de estrategias que promuevan el bienestar de la comunidad educativa en las Instituciones de Educación Superior y que permitan reducir la brecha entre la matrícula y el egreso, sobre todo, entre los grupos poblacionales más marginados (UNESCO, NU. CEPAL y UNICEF, 2022).

Por otro lado, las grandes brechas sociales y económicas en los países de América Latina demandan indispensables políticas estructurales que posibiliten las condiciones pedagógicas y sociales necesarias para garantizar los aprendizajes, no solo de los jóvenes, sino también de los niños, niñas y adolescentes de la región.